

40

Años



De Reformas y Políticas Económicas en Chile¹ (y los desafíos para los próximos años)



RICARDO FFRENCH-DAVIS²
Profesor Departamento
de Economía, FEN
Universidad de Chile
rffrench@fen.uchile.cl

Justificadamente, la economía chilena goza de fama de elevado crecimiento y de haber avanzado hacia el nivel de ingresos de las naciones más avanzadas. En efecto, en 1970 el PIB per cápita de Chile alcanzaba, por ejemplo, al 26% del de los EEUU (en dólares comparables ppp) y en 2012 se empinaba a 36%. En años recientes esa fama ha ido siendo manchada por la constatación de la elevada desigualdad que la caracteriza. En este artículo examinaremos la evolución de la producción o PIB de Chile y su interrelación con la desigualdad. Ambos --crecimiento y desigualdad-- han sido muy variables en estos cuatro decenios, con cambios que responden a reformas y políticas significativamente diferentes.

Es inconsistente, con la información objetiva disponible, afirmar que exista continuidad de “un” modelo chileno único desde 1973. La realidad es que los cuatro decenios transcurridos desde 1973 abarcan varios sub-períodos, con énfasis muy distintos en las políticas nacionales, entornos externos diversos y resultados económicos y sociales notablemente diferentes. El cuadro adjunto muestra antecedentes cuantitativos de cinco sub-períodos y confirma la gran variedad de resultados en cuanto a crecimiento y distribución.

¹ Los cuatro decenios se analizan en detalle en R. Ffrench-Davis, Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: reformas y políticas económicas desde 1973, quinta edición, JCSáez Editor, Santiago, octubre 2013. Allí se encuentran más de 300 referencias de diversos enfoques sobre el período cubierto. Lo que sigue en este artículo, naturalmente, es mi interpretación de los hechos.

² Autor de Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad, quinta edición, recién aparecida.

Cuadro 1

PIB, exportaciones, inversión, y salarios, 1990-2012
(tasas promedio de crecimiento anual,%)

	1974-81	1982-89	1990-98	1999-07	2008-12	1999-12
1 PIB	3	2,9	7,1	3,9	3,9	3,9
2 PIB exportado	13,6	7,8	9,9	6,4	0,6	4,3
3 PIB no exportado	1,5	1,7	6,5	3,1	4,8	3,7
4 Índice remuneraciones real	-0,3	-0,7	3,9	1,9	2,5	2,1
5 Salario mínimo real	2,8	-4,8	5,3	3,6	2,4	3,2

Fuente: Tomado de R. Ffrench-Davis, Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: reformas y políticas económicas desde 1973, quinta edición, JCSáez Editor, Santiago, diciembre 2013. Elaborado a base de cifras de cuentas nacionales del Banco Central en moneda de 2003, y tasas de variación de la base móvil encadenada, serie de referencia 2008 desde 2006; cifras del INE para remuneraciones por hora y salario mínimo líquido.

Una parte del sector empresarial se modernizó con el surgimiento de nuevos grupos económicos y ejecutivos, quienes eran más innovadores que sus predecesores.

La primera etapa del proceso de reformas (1973-81) se caracterizó por la aplicación de un modelo neoliberal en su versión más extrema de libertad económica, en el contexto de un régimen dictatorial. Contenía muchos ingredientes de lo que casi dos decenios después se denominaría “el Consenso de Washington”. Profundas liberalizaciones comerciales y financieras aceleradas y la eliminación de la “selectividad” en las políticas económicas fueron acompañadas de privatizaciones masivas. En términos generales, positivamente, hacia 1981 se había reducido drásticamente la inflación y un abultado déficit fiscal había sido reemplazado por un elevado superávit, pero a expensas del equilibrio externo y un endeudamiento desmesurado del sector privado, acompañado de una débil inversión productiva, un deterioro distributivo, y un sistema financiero plenamente desregulado. El desenlace fue una debacle económica y social en 1982. Con una crisis bancaria y cambiaria, una caída del producto de 14% y una tasa de desempleo superior a 30%, junto a un marcado aumento de la pobreza y un empeoramiento de la distribución del ingreso.

La segunda etapa (1982-89), estuvo marcada por una apertura hacia un enfoque más pragmático para superar los efectos de la crisis. Ello involucró una serie de renegociaciones de la deuda externa, diversas medidas de política tendientes a equilibrar el balance externo -aumento de aranceles de importación (de 10 a 35%), incentivos “selectivos” a las exportaciones no tradicionales y devaluaciones cambiarias (130% real entre 1982 y 1988), y la intervención directa del colapsado sistema financiero, posteriormente reprivatizado. Cabe destacar, que todas estas acciones eran rechazadas violentamente por “el modelo” de la primera etapa.

El rescate de bancos y deudores privados tuvo un enorme costo fiscal, y para la sociedad chilena: el gobierno destinó el equivalente a 35% de un PIB anual al rescate de sectores afectados, recursos que fueron desviados de la inversión pública, pensiones, educación y salud.

Al final de este período, la economía se había recuperado, aunque con un fuerte deterioro distributivo adicional respecto de los años setenta. La relación entre el ingreso del quintil más rico y el más pobre se había deteriorado desde un promedio de 13 veces en los 60s, a 15 veces en 1974-81 y a 20 veces en 1982-89. Durante esa fase de recuperación, después de la notable recesión de 1982-83, el PIB creció vigorosamente; sin embargo, si no se ignora la existencia de la recesión resulta que el crecimiento promedio en la segunda mitad del régimen de Augusto Pinochet fue similar al 2,9% anual registrado en la primera etapa. Uno de los rasgos compartido por estos dos sub-períodos en esos 16 años fue la decaída tasa de inversión --que comprende equipos y maquinarias, construcciones comerciales y residenciales e infraestructura, todo esencial para crecer y dar mejores empleos--. Fue notablemente baja (4-5 puntos del PIB menor que en los 60s cuando el aumento del PIB promedió 4,5%).

Las reformas neo-liberales generaron sustanciales efectos sobre la estructura productiva del país: un notorio auge de las exportaciones junto con una caída abrupta de la manufactura. Una parte del sector empresarial se modernizó con el surgimiento de nuevos grupos económicos y ejecutivos, quienes eran más innovadores que sus predecesores. No obstante, la gran mayoría de las empresas seguían ajenas a la modernización, con lo cual se acentuó la heterogeneidad estructural (o desigualdad estructural) entre empresarios (grandes y pequeños) y entre trabajadores (de alta y de baja calificación).

En definitiva, el reverso de la medalla del notable progreso de algunos fue la marginación de muchos. Ello explica por qué la modernización y expansión de algunos sectores coexistió con un crecimiento económico mediocre, de apenas 2,9% anual en 1974-89; así como que la tasa media de inversión haya sido notoriamente inferior a la de los años sesenta. Sus cambios principales positivos fueron una inflación baja, exportaciones crecientes, presupuesto fiscal con financiamiento real la mayor parte del tiempo, y el establecimiento, pero recién en 1986, de una regulación y supervisión estricta del sistema financiero; cuatro atributos que era preciso mantener y adaptar a los nuevos tiempos. Algunos de los principales negativos: la manera como se hicieron las reformas comercial, financiera (que, por ejemplo, implicó una tasa interés activa promedio de 38% real entre 1975 y 1982), laboral y tributaria y las privatizaciones, fueron para sentar una economía propensa a crisis --graves en 1975 y 1982-- alto desempleo y baja inversión productiva; recuérdese el dato tan ilustrativo de caída de la inversión productiva promedio en los 16 años de neoliberalismo.

A comienzos de los noventa, la economía chilena enfrentaba el desafío de alcanzar un ritmo de crecimiento elevado y sostenido y de asumir la cuantiosa deuda social.

Frente a estos resultados mediocres en crecimiento y equidad, los admiradores del régimen suelen argumentar que se requiere tiempo para que las reformas surtan sus efectos. La necesidad de tiempo es evidente. Pero, en este caso no son unos pocos años, sino que fueron más de tres quinquenios; tanto como los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos juntos; suficiente tiempo para que las reformas hubiesen producido sus logros. Además, es muy revelador, que el crecimiento durante la dictadura es similar en su primera mitad y en la segunda, con baja formación de capital productivo, elevada pobreza y deteriorada distribución del ingreso.

A comienzos de los noventa, al retornar el país a la democracia, la economía chilena enfrentaba pues el desafío de alcanzar un ritmo de crecimiento elevado y sostenido y de asumir la cuantiosa deuda social acumulada en los años de dictadura. En consecuencia, con el advenimiento de la democracia en 1990 se inició una tercera variante del modelo chileno, a la que hemos llamado reformas a las reformas, pues planteaba corregir lo que

se había recibido como herencia. Las trabas constitucionales e institucionales limitaban fuertemente el espacio de acción, y para la sostenibilidad de la democracia se consideraba que la percepción de estabilidad económica era esencial.

Se impulsaron entonces reformas de los mercados que fortalecieron el componente social y corrigieron graves deficiencias de las políticas económicas neo-liberales. Las reformas laborales, que restablecieron derechos de los trabajadores y elevaron el salario mínimo, fueron acompañadas de modificaciones tributarias, a fin de incrementar la recaudación, mejorando la progresividad, y sustentar el crecimiento del gasto social.

La disciplina fiscal fue un ingrediente central; por ello, cada desembolso estatal nuevo, para financiar gasto social o de desarrollo productivo, implicaba identificar la nueva fuente de financiamiento real (no ficticio como lo es vía impresión de billetes). Por otra parte, era evidente que la dictadura había tenido estabilidad del nivel de precios, pero enorme inestabilidad del empleo, del tipo de cambio, y de la demanda interna (esto es, evidente inestabilidad macroeconómica real), y creciente desigualdad. Por ello, se implementaron cambios sustanciales en las políticas monetarias, cambiarias y regulatorias --con un fuerte sentido contra-cíclico-- que apuntaron a conseguir un entorno macroeconómico estable y sostenible, considerado por las nuevas autoridades funcional para el desarrollo económico y el empleo.

En consecuencia, se controlaron los flujos de capitales de corto plazo con el uso de un encaje variable sobre esos flujos y se manejó el tipo de cambio para evitar fluctuaciones excesivas. En paralelo con una política monetaria de frecuentes mini ajustes (para evitar maxi ajustes) y la disciplina fiscal, se generó efectivamente lo que se llama "políticas contra-cíclicas". Este fue el contexto en el que durante los años noventa Chile logró expandir, en forma sustancial y sostenida, su capacidad productiva. El PIB creció un promedio anual de 7,1%, mejorando en forma simultánea los indicadores sociales: junto con la reducción significativa de la pobreza (de 45% a 21% de la población) se logró cierta mejora en la distribución del ingreso.

Quiero realzar dos puntos. Es destacable que la tasa de inversión, principalmente efectuada por el sector privado, se elevó sostenidamente durante esos años: En 1990-98 promedio 8 puntos del PIB más que en 1974-81 y 1982-89. Es la principal variable explicativa de por qué la economía creció apenas 2,9% anual en los sub-períodos pasados y 7,1% en los noventa. Segundo, a mitad del sub-período en comento, explotó una crisis financiera y cambiaria en México, Argentina y Uruguay, que tiró el promedio de aumento del PIB de 1995 del conjunto de América Latina a cerca de cero (negativa per cápita). Ese año la economía chilena permaneció incólume, con un crecimiento superior al 7%: no tenía tipo de cambio apreciado, sino en nivel sostenible, un balance externo modesto financiado con flujos de largo plazo, alta inversión productiva y escasos pasivos externos de corto plazo. No por casualidad o buena suerte, sino por la política macroeconómica contra-cíclica. Ayudó un precio positivo del cobre, aunque era 20% menor que el elevado precio vigente a fines de la dictadura (1988-89).

No obstante este favorable desempeño, en lo social y económico, en la segunda mitad del decenio, se fue debilitando, muy gradualmente, la decisión precedente de aplicar políticas contra-cíclicas ante las turbulencias externas. Ello fue causado por un conjunto de variables desafortunadas para el crecimiento sostenido y la equidad. Luego de la llamada crisis del tequila y la fuerte acción del gobierno del Presidente Clinton que tranquilizó a los mercados financieros respecto a México y América Latina, tomó fuerza la creencia en Washington y las entidades financieras de que el mundo había aprendido a manejar y evitar las crisis (¿cuántas veces el mismo grave error!!); el FMI empezó a desarrollar la idea de que su asamblea directiva le instruyese imponer a los países miembros la apertura de la cuenta de capitales; el deslizamiento hacia la política predominante en la enseñanza de la economía de caminar hacia la liberalización irrestricta de la cuenta de capitales y de la tasa de cambio, con el consiguiente retroceso en la calidad de las políticas macroeconómicas; y la

presión adicional en Chile, de que como había respondido tan bien a la crisis del tequila, Chile ya era inmune a crisis. Por ello, Chile fue afectado, aunque suavemente por el contagio de la crisis asiática en 1998-99, pero había perdido capacidad de recuperación rápida.

En efecto, esta tendencia hacia abrir la puerta a las vulnerabilidades pro-cíclicas se acentuó fuertemente por la completa liberalización del tipo de cambio en 1999 y de la cuenta de capitales (en 2001). Ello redundó en un estancamiento de la producción y del potencial de crecimiento durante todo el quinquenio 1999-2003; cinco años en plena recesión, con un mediocre aumento de 2,6% anual del PIB. Luego de una recuperación parcial entre 2004 y 2008, liderada por una espectacular alza del precio del cobre, hasta avanzado el 2008, sufrió los embates de la crisis global. Gracias a un acertado manejo interno, principalmente de la política fiscal que lideró una decidida política contra-cíclica, y el apoyo afortunado de una rápida recuperación de los precios de exportación, ya hacia fines del 2009 prevalecía una sólida reactivación económica que se prolongó en los primeros meses de 2010.

Chile fue afectado, aunque suavemente por el contagio de la crisis asiática en 1998-99, pero había perdido capacidad de recuperación rápida.

Los cuatro gobiernos de la Concertación abarcaron hasta marzo de 2010, con un crecimiento promedio del PIB efectivo de 5,1%.³ El crecimiento efectivo hasta 2007, antes del contagio de la crisis global, era de 5,5%. La Concertación tuvo 15 años con un crecimiento promedio del PIB de 6,3%, tres años de ajuste de 3-4% (1990, heredado de la dictadura, 1998 con el inicio del contagio de la crisis asiática y 2008 con el inicio del contagio de la crisis global), y dos recesiones marcadas con caídas de 1% (1999 y la de 2009). La distribución del ingreso es menos desigual que a fines de la dictadura, incluido el salario mínimo real: en 1989



³ El crecimiento del PIB potencial fue algo superior al 5,5% anual, dado que a la llegada del contagio aun no se alcanzaba la frontera productiva. El contagio de la crisis global implicó subutilizar un 2-3% del PIB potencial en 2008 y 7-8% en 2009.

era 7% menor que en 1970; en 2009 era 130% superior a 1989; pero, con todo, la desigualdad era y es notablemente peor que en las economías desarrolladas.

Luego del grave sismo de febrero 2010, la reactivación continuó acelerándose, culminando en 2012 con un PIB efectivo situado alrededor del producto potencial. El alza del PIB después del contagio global fue vigorosa hasta 2012, promediando 5,8%, moderándose el presente año, por cuanto ha concluido la etapa de recuperación de los efectos recesivos del contagio. Cuando no se ignora que en 2009 hubo una crisis no solo en Chile sino global, el aumento del PIB ha promediado un 3,9% desde su peak anterior en 1998 hasta el 2012.⁴ Si se ajusta por el impacto destructivo del sismo de 27F, la cifra media se sitúa en 4,3% anual; refleja aproximadamente la velocidad de creación de nueva capacidad productiva en un entorno internacional con comercio aun deprimido. La cifra es evidentemente superior al 2,9% de la dictadura, pero notoriamente inferior al 7,1% de los primeros nueve años de regímenes democráticos.

los balances externo y fiscal. No se ha cumplido con mantener balances sostenibles entre la capacidad de producción de exportables y demanda por importaciones; entre gastos fiscales permanentes e ingresos fiscales estructurales; entre gastos requeridos para acelerar un desarrollo integral y los gastos fiscales efectivos; entre evolución de la demanda agregada y PIB potencial. El gasto fiscal para el desarrollo integral --calidad de la educación pública, salud, apoyo al desarrollo productivo y a PYMES--, siguió precario o insuficiente. En cuanto a la dimensión macroeconómica, se acentuaron los efectos negativos de la apreciación cambiaria y se consolidó, injustificadamente en la nueva coyuntura --dada la desaparición de la brecha recesiva-- un desequilibrio entre gasto fiscal permanente e ingresos públicos sostenibles. En consecuencia, estos dos balances se han deteriorado, y descansan en ingresos fiscales resultantes de un elevado precio del cobre previsiblemente no sostenible. Algunas cifras son ilustrativas al respecto: Comparo con 2007, año del mencionado peak de actividad económica anterior. Entre 2007 y 2012 el volumen de las importaciones se



Es muy positivo que en 2012 la economía esté situada cerca del pleno uso de su capacidad productiva o PIB potencial, con mayor empleo y con la inflación bajo control. El tránsito persistente desde la brecha recesiva hasta una cercanía al pleno empleo y uso del PIB potencial refleja un equilibrio macroeconómico esencial. Pero, los equilibrios macroeconómicos además incluyen otras dimensiones cruciales: balances externo y fiscal sostenibles y funcionales para un crecimiento vigoroso del PIB potencial.

En consecuencia, el positivo cierre de la brecha recesiva, para ser sostenible y no conducir a un nuevo ajuste recesivo o crisis, requiere que durante el progreso hacia el pleno empleo se logre una convergencia del conjunto de balances macroeconómicos. En ese sentido, la tasa de inflación ha sido notablemente moderada, reflejando una positiva estabilidad del nivel de precios, aun después de corregir por el impacto de una apreciación cambiaria excesiva. En contraste, ello no ha sido el caso de

elevó 41% (7,1% anual); más que el 3% el volumen o quantum de las exportaciones (0,6% anual), pero como el comercio mundial está deprimido no es correcto quedarse con este abrumador contraste. Por ello comparamos con el aumento del PIB: es de solo 21% (3,9% anual), la mitad del de las importaciones. Es sabido que estamos con un boom de importaciones, financiadas con un precio notable del cobre (US\$3,61 por libra en 2012, y un déficit externo ya sugerente de 3,5% del PIB y una deuda externa privada que se va elevando (de US\$42 mil millones en 2007 a US\$93 mil millones en 2012).

El aumento del gasto fiscal fue evidentemente acertado ante el contagio de la crisis internacional; pero luego de ello se debe "normalizar". No se "normalizó" durante el curso de este trienio. Es efectivo que después de un salto del gasto en 2010, justificado por el desafío de la reconstrucción post sismo, los desembolsos fiscales han crecido más lento que el PIB en 2011-12.

⁴ Reiteradamente, destacamos que la medición del crecimiento económico debe efectuarse entre situaciones macroeconómicas comparables. La norma que utilizamos es comparar años de nivel elevado de uso de capacidad o cercanía entre el PIB efectivo y el potencial. Recuperaciones significativas en 2004-08 y en 2010-12 vienen después de situaciones recesivas que no se pueden ignorar. En cambio, el crecimiento vigoroso de 1990-98 tuvo lugar después de una economía sobrecalentada en 1989.

Sin embargo, lo han hecho sobre la base elevada de 2009 y 2010, con ajustes tributarios notoriamente insuficientes para financiar en forma sostenible el gasto permanente ya presupuestado y en operación. El gasto fiscal (en moneda constante) supera en 47% el de 2007 en contraste con el 21% del PIB y el 32% de los ingresos fiscales distintos a los del cobre (principalmente por el IVA que grava el gasto interno en vez del ingreso o PIB).

En paralelo, ambos desequilibrios son ocultados por el hecho que el precio del cobre se ha mantenido muy elevado, con un doble impacto, financiando la cuenta corriente y la cuenta fiscal. En ese sentido, no hay cambio de política con el actual gobierno que explique un salto en el crecimiento del PIB potencial; las cifras basadas en las fuentes oficiales al ser examinadas correctamente así lo demuestran. No hay un cambio estructural respecto del gobierno anterior, sino una continuación del impulso reactivador, inicialmente hacia el equilibrio en uso de la capacidad disponible; pero enseguida la nueva coyuntura ameritaba un ajuste sustancial de la política macroeconómica, lo que no se hizo. En mi opinión, en lo fiscal habiendo efectuado --o avanzado hacia-- una reforma tributaria profunda y en el balance externo retomando una política cambiaria activa pro-desarrollo.

Los desafíos: recuperar crecimiento sostenible y ataque a la gran desigualdad

La pérdida de dinamismo y la persistencia de desigualdad aun elevada tienen varias causas, que requieren ser enfrentadas con coherencia y de manera integrada. Destaco dos dimensiones. Uno, el deterioro en la calidad de las políticas macroeconómicas tiene un rol: fuerte inestabilidad del tipo de cambio perjudicial para las exportaciones con valor agregado y para las PYMEs que compiten con importaciones; intensas fluctuaciones de la demanda interna --donde se ubican la gran mayoría de los trabajadores y empresarios nacionales, nunca olvidarlo si queremos desarrollo-- lideradas por la volatilidad de los flujos financieros y de los precios de las exportaciones; esas dos fallas deprimen la inversión y la calidad del empleo (sus efectos son recesivos y regresivos). Dos, la falta de políticas de desarrollo productivo que impulsen la innovación en los sectores medios y bajos, elevando su productividad, diversificando las estructuras productivas (de exportaciones y del resto del PIB) y acortando "hacia arriba" las brechas de productividad y con ello de ingresos entre ricos y pobres.

Chile está a un tercio del ingreso per cápita de los estadounidenses en paridad de poder de compra. Dado que nuestras grandes empresas son competitivas en el mundo, nuestra pobreza no está explicada por ellos. Nuestra desigualdad está en los sectores bajos y medios que tienen baja productividad y bajos ingresos, muchos están en la informalidad y comprenden empresarios sin acceso al mercado de capitales o empresarios con acceso a costos del crédito 3,4 o 5 veces las tasas que pagan las empresas grandes, ahí está la desigualdad que se gesta en el actual funcionamiento de los mercados.

Esta constatación es muy relevante: indica que hay una complementariedad entre crecer y distribuir, si lo que se

hace, en vez de distribuir cheques o cupones, es "distribuir" productividad y empleabilidad. Hay que crecer reduciendo en paralelo la desigualdad. Se precisa un gran apoyo a las PYMEs, reformando a fondo la grave falla del mercado de capitales, corrigiendo el acceso limitado a financiamiento para el desarrollo de las PYMEs y de emprendedores potenciales sin patrimonio, y las desmesuradas tasas de interés que sufren; incentivando la innovación; poniendo en marcha un vigoroso programa nacional de capacitación laboral y de pequeños empresarios, con prioridad en las políticas públicas; educación de calidad; reforma tributaria para darle un sesgo progresivo en la dirección de los sistemas de las economías desarrolladas y financiar sostenidamente las políticas de desarrollo productivo.

En lo macroeconómico, corrigiendo la errada política cambiaria, que deja una variable tan macro a los cambiantes humores de inversionistas especulativos de corto plazo: requerimos que el tipo de cambio responda a las necesidades de los productores de transables (exportaciones con mayor agregado y competidores nacionales con importaciones, muchas PYMEs entre ellos); intensas fluctuaciones de la demanda interna y del crédito de consumo

Chile está a un tercio del ingreso per cápita de los estadounidenses en paridad de poder de compra. Dado que nuestras grandes empresas son competitivas en el mundo, nuestra pobreza no está explicada por ellos.

a tasas desproporcionadas-- lideradas por la volatilidad de los flujos financieros y de los precios de las exportaciones. Grave responsabilidad del enfoque adoptado a fines de los noventa, que ha sido muy exitoso en lograr inflación baja, pero con inestabilidad de la economía real, menor crecimiento y efectos regresivos. Esto lo reitero, porque es grave la creencia que la macroeconomía ha sido eficiente, lo que es un serio error si lo que interesa al final es el crecimiento y la equidad; ambos, no ninguno. La inflación bajo control es un insumo esencial, pero no es el objetivo.

En breve, crecer porque va aumentando la productividad y empleabilidad de los sectores medios y bajos, la estabilidad de sus empleos y sus ingresos, que así van creciendo en paralelo con el ingreso del PIB. El desarrollo no se logra con las minorías, que naturalmente son necesarias, pero la suma positiva se logra con mayorías: cientos de miles de pequeños empresarios y millones de trabajadores que van entrando a la formalidad de manera sostenida, no precaria, y con salarios sostenidamente crecientes. El desarrollo es crecimiento fuerte con reducción de la desigualdad. Todos los países desarrollados tiene brechas de ingresos espectacularmente menores que las chilenas. E&A